



Nº 72

Primera Quincena de Marzo de 1977

15 Ptas.

¿negociar
o
suplicar?

Los diversos juegos del Sr. Presidente

El Presidente Suárez pretende presentarse como "árbitro neutral" de las anunciadas elecciones. Y, mientras tanto, va preparándose el terreno para evitar por todos los medios que del encuentro pueda salir un resultado peligroso — peligrosamente democrático, se entiende. Las operaciones más importantes que tiene ahora entre manos consisten en retrasar la legalización de cuanto suene a comunista — a tres meses vista de las elecciones—, en hacer caer la represión sobre la izquierda revolucionaria —sobre la que no cesan de llover todo tipo de prohibiciones—, y en promocionar las opciones políticas más dóciles a su presidencial invento de la "reforma".

Meses atrás, el Sr. Presidente intentó otras jugadas. Se interesó primero por promocionar la organización de la derecha "civilizada", moviendo los hilos que llevarían a la formación del Centro Democrático, agrupación electoral que la prensa se ocupó de presentar como la gran opción del cambio sin riesgos. Al mismo tiempo, siempre jugando a varias bandas, favoreció el lanzamiento del centro-izquierda —con el PSOE de Felipe Gonzalez como estrella— e incluso se mostró interesado por impulsar la unidad de los socialistas, siempre que ésta se hiciera en forma de integración en el PSOE. Ya tenía una derecha presentable y una izquierda poco peleona; las cosas no le iban mal al Presidente...

Pero ahora Suárez nos obsequia con nuevas piruetas. Por lo visto no son suficientes las muestras de moderación dadas por los dirigentes políticos del centro-izquierda y, en el caso del PSOE, tal vez Suárez no confíe en la posibilidad de convertir a la socialdemocracia a toda la base de este partido... Y ahí está la decisión de premiar con la legalización el vasallaje del "sector histórico". "Confunde, divide, incordia y estarás más cerca de vencer", parece ser el lema de Suárez.

Pese a la docilidad mostrada por la Comisión negociadora, al cabo de los meses ha quedado clara la nula disposición del Gobierno a dar paso alguno que demostrara un mínimo de buena voluntad hacia las fuerzas democráticas. En vísperas de las elecciones la amnistía sigue pendiente —4 presos liberados tras 2 meses de promesas—; el aparato fascista del Movimiento sigue ahí con sus Gobernadores Civiles al frente, dispuestos a controlar el proceso electoral y a jugar el papel caciquil de siempre; los medios de comunicación siguen en manos del Gobierno y cerrados a los partidos de izquierda...

Suárez se encarga de unir a la derecha en la medida que le conviene y aislar a la izquierda; legaliza a éste con todos los honores y prohíbe a aquél... ¡Extraña neutralidad la suya!

Suárez, como todo el mundo sabe, se educó en la escuela fascista del Movimiento y allí aprendió sus habilidades de dictador "de nuevo tipo". Un estilo de gobernante que, para sacar adelante sus planes trazados de antemano, se dedica a jugar a muchas bandas.

Hay quien considera al Sr. Presidente como un hábil político. Seguramente tienen en la cabeza la tediosa monotonía de la vida política oficial en los larguísimos años de franquismo monocolor. Es que en aquellos tiempos no había comedias de negociaciones con la oposición, ni partidos que legalizar o prohibir, ni elecciones que manipular... Hoy para ser dictador hay que emplear métodos más variados. Porque jugar a democracia ya es otra cosa... ■

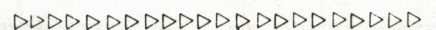
Cuando se creó la "Comisión de los nueve" para la negociación con el Gobierno hubo muchas voces, y entre ellas la nuestra, que advirtieron que de todos los caminos posibles se había escogido el peor. El programa de la Comisión era peligrosamente ambiguo en cuestiones de importancia vital como la de amnistía total. Y en lo que hace a las reivindicaciones de las nacionalidades el programa quedaba claramente por debajo de lo que éstas habían expresado como exigencias mínimas.

La "Comisión de los nueve" nació bajo el signo de las renunciaciones y claudicaciones en materia de programa y nació también bajo el signo de las exclusiones. Se dejó fuera a las fuerzas políticas de izquierda que habían estado y siguen estando en la primera fila de la lucha popular por la democracia. No hubo sitio tampoco para la "Taula de forces polítiques i sindicals del País Valencià". Se apañó una llamada representación de Euskadi, Galicia y Catalunya que tenía en común, entre otras cosas, el hecho de no ser en absoluto representativa de las fuerzas que en Euskadi, Galicia y Catalunya han luchado más por los derechos nacionales de estos pueblos.

La "Comisión de los nueve" anunció desde el primer momento que no rendiría cuentas de su gestión ante los organismos unitarios ni ante los partidos democráticos no presentes en la comisión.

En estas condiciones nuestro partido, al igual que otras fuerzas democráticas, manifestó que no se sentía vinculado a esa negociación, ni a los compromisos a que pudiera llegar con el Gobierno. Ahora, al cabo de dos meses de negociación del Gobierno con la "Comisión de los nueve" (luego convertida en "Comisión de los diez"), los hechos nos han dado la razón.

(sigue en la página 2)



(viene de la página 1)

La Comisión negociadora no ha negociado. Ha suplicado. Ha ido exponiendo al Gobierno la opinión sobre diversos problemas de importancia y el Gobierno se ha limitado a tomar nota para hacer a continuación lo que le parecía más oportuno. El Gobierno al parecer ha escuchado mucho pero no ha negociado nada. Y no ha negociado nada porque nadie le ha obligado a hacerlo.

La Comisión negociadora fue liquidando todos los instrumentos de presión política de que podía disponer:

□ Se excluyó de la negociación a fuerzas democráticas de izquierda porque se pensaba, y con razón, que nos mostraríamos intransigentes respecto a las reivindicaciones democráticas básicas, reclamadas por el pueblo.

□ Se hizo todo lo posible para liquidar la movilización popular, llegando algunos de los miembros de la comisión a desaconsejar públicamente toda acción de presión popular sobre el Gobierno.

□ El contenido de las conversaciones con el Gobierno se ha mantenido siempre en la reserva más absoluta a pesar de que en un principio la Comisión se comprometió a llevar adelante una negociación pública. Vistos los resultados alcanzados, podría pensarse que acaso el silencio de los señores negociadores se debía a cierta vergüenza por su parte de exhibir públicamente los fracasos sucesivos que han ido cosechando en todos los puntos de negociación.

□ Un Gobierno que sólo ofrecía buenas palabras fue correspondido generosamente por una Comisión que no perdía ocasión de deshacerse en alabanzas sobre lo abierto y comprensivo que se mostraba en su trato con ellos el Sr. Presidente del Gobierno.

□ El cese de la represión era —eso se dijo al menos— una condición previa para la apertura de cualquier tipo de negociaciones. La represión ha continuado de mil formas distintas pero en ningún momento se amenazó siquiera con suspender las conversaciones con el Gobierno.

□ Gobierno y Comisión se han mostrado en todo momento de acuerdo en la conveniencia de mantener al Rey al margen de la negociación. Esto, que sin duda era bueno para monarca y Gobierno, debilitaba muy seriamente la capacidad de presión sobre ambos.

Suárez quedaría así como único responsable, si las exigencias mínimas —nunca mejor empleada la palabra— eran rechazadas, y la imagen del Rey no se vería empañada.

□ A pesar de los esfuerzos desarrollados por algunos de los partidos de la Comisión y por quienes se autootorgaron el título de representantes de las nacionalidades en la Comisión, la verdad es que las insuficiencias que el programa de la Comisión contenía sobre el tema de las nacionalidades, provocó en Euskadi, en Galicia y en Catalunya las idas y venidas de la Comisión no despertaron ni el más mínimo interés. Y es que hay que ser muy iluso para pensar que las reivindicaciones de las nacionalidades podían ser defendidas por una comisión de la que forman parte gentes que han mostrado tanta o más hostilidad que el Gobierno frente a los derechos nacionales de los pueblos del Estado.

□ A la hora de negociar las condiciones de las elecciones en ningún momento se hizo ver seriamente al gobierno la posibilidad de no concurrir a ellas si no se aseguraban plenamente unas bases realmente democráticas para el proceso electoral.

Hay, a tres meses de las elecciones y después de dos meses de negociación, parece que es ya la hora de echar cuentas de los logros alcanzados por la comisión: los presos siguen en la cárcel; varios partidos democráticos —en concreto los que más han luchado contra el régimen— siguen siendo considerados ilegales, la policía política, amparada en la prolongación del estado de excepción, sigue utilizando sus métodos tradicionales; el Gobierno continúa con la firme intención de manipular las elecciones según le convenga; los derechos de las nacionalidades continúan siendo negados... A esto se puede añadir la falta de libertad sindical, la subida continua de precios, el despido libre...

Si la Comisión negociadora pretendía en realidad forzar al Gobierno a establecer un marco mínimo de libertad antes de las elecciones, debería reconocer abiertamente que su gestión ha constituido un rotundo fracaso. Ahora bien, si lo que se andaba buscando no era la democracia sino simplemente que el Gobierno les garantizara tal o cual porcentaje electoral, entonces cada uno de los miembros de la comisión sabrá cómo le ha ido en sus particulares y secretísimos negocios con el gobierno.

Quién parece que no ha quedado al final muy contento es el PSOE. La legalización del llamado "sector histórico del PSOE" ha desatado las iras de

los partidarios de Felipe González. En la declaración del día 22, firmada por la comisión ejecutiva, se decían cosas como estas: *"Respetamos las monarquías si éstas respetan la política democrática, pero si las monarquías tienen intereses arbitrarios y no respetan las reglas democráticas los socialistas nos veremos obligados a propiciar un cambio de régimen"* *"Cada día, con su comportamiento con los partidos de clase, se muestra el actual gobierno menos apto para presidir con imparcialidad unas elecciones"*. *"Nuestro enemigo es el Gobierno, autor de una sucia jugada"*. *"Esta Comisión Ejecutiva entiende que la manipulación operada desde el poder contra el PSOE excluye para nosotros la credibilidad sobre las intenciones de limpieza democrática del Gobierno y, en consecuencia, la oportunidad de negociar con este Gobierno"*.

Ahora por fin el PSOE emplea un lenguaje firme, ahora por fin denuncia la responsabilidad que el Rey tiene en los actos antidemocráticos del Gobierno... ¡Que lástima que este lenguaje no se haya empleado antes y no se haya, sobre todo, empleado para defender causas más importantes! Se mantenía, y se mantiene, a muchos partidos en la ilegalidad pero el PSOE parecía estar muy satisfecho del comportamiento del Gobierno. Se aplazaba, y se sigue aplazando, el tema de las nacionalidades pero eso, por lo visto, no era muy grave para el PSOE. Se perseguía, y se persigue, a los partidos de izquierda pero ésa no dejaban de ser pequeñas. Pero, ¡ahora sí! Cuando se pone en peligro el porcentaje electoral previsto, cuando el gobierno legaliza con ese nombre al PSOE histórico para que le reste unos cuantos votos al otro PSOE, es cuando aparece la indignación más fiera. Lo que demuestra que al PSOE, al igual que a otros muchos partidos que presumen de democratas, les preocupa mucho más asegurar su tanto por ciento que asegurar la democracia. Esto es algo que algunos ya sospechábamos y que ahora aparece con toda claridad para quien quiera verlo.

De la falta de libertad, del mantenimiento de los presos en la cárcel, de las leyes electorales tramposas y discriminatorias son y serán responsables el Rey y su Gobierno. Pero es también responsable buena parte de la oposición que se ha prestado a todos los juegos del Gobierno, esperando recibir a cambio pequeñas o grandes ventajas electorales.

Unos pueblos que han luchado tanto como los nuestros merecían algo mejor, merecen sin duda algo mejor para el futuro. Si aprender a conocer a los partidos por sus siglas es importante, aprender a conocerlos por sus actos lo es mucho más. □

La demagogia económica del Gobierno

Miguel Rodríguez Morales

Se ha hecho público un programa económico que sin duda ninguna va a seguir el mismo camino que los programas que le han precedido: fracasar en cuestión de meses y empeorar la situación.

Todos los expertos coinciden en afirmar que las medidas del Gobierno responden directamente a los intereses electorales del mismo. Efectivamente, en medio de una continua agravación de la crisis, el Gobierno afirma con el mayor optimismo que va a lograr un incipiente despegue económico, y un crecimiento económico que supera en dos o tres veces al conseguido el año pasado. ¿En qué se basa este optimismo? Lo ignoramos, porque no ofrecen ningún dato concreto que lo justifique.

A falta de concreción, se enumeran grandes objetivos generales: Reforma fiscal, pleno empleo, reducción del déficit exterior, fomento de la agricultura, mejora del urbanismo... El Gobierno parece incluso haber aprendido a utilizar los términos que ha usado todos estos años la oposición y habla del "agotamiento del modelo económico" y su sustitución por uno nuevo. Lo curioso del caso, es que sigue confiando en la "promoción de nuestros recursos turísticos", en "incentivar las remesas de divisas de emigrantes", cuando son precisamente éstas las características esenciales de ese modelo que dicen que van a abandonar.

En efecto, los objetivos que se apuntan son grandes. Pero de las 49 medidas del Programa, las tres cuartas partes son totalmente inconcretas, meras declaraciones de principio. Ni se especifica el cuánto, ni el cómo, ni el cuándo.

Realmente, estas medidas, además de la demagogia y la pretensión de ofrecer una buena imagen electoral, son lo de siempre: seguir favoreciendo a los grandes capitalistas con el crédito oficial (financiación prioritaria a la exportación), las subvenciones y acciones concertadas, las disminuciones de impuestos (apoyo fiscal a la inversión, reducción de impuestos a los "holdings"...), medidas todas ellas que favorecen a las grandes empresas monopolistas. Todas las medidas de apoyo a la inversión privada son inaccesibles a la pequeña y mediana empresa y, por supuesto, a los campesinos. El ligero crecimiento económico que pueda lograrse será en base al desarrollo de las grandes empresas, siguiendo en la línea de arruinar a las pequeñas y medianas. Precisamente esto, junto con la disminución de los salarios a los trabajadores, resultan ser los medios

fundamentales de salir de la crisis para los grandes capitalistas... Esó sí, cuando los trabajadores exijan subidas salariales, se les acusará de irresponsabilidad por precipitar la ruina de los pequeños y medianos empresarios, que no pueden soportar tales aumentos. Y, mientras tanto, no se les da —incluso se les retira— a estas empresas ningún apoyo económico. Mayor demagogia, no cabe.

Pese a todo esto, el Gobierno no parece confiar excesivamente en que las anteriores medidas supongan realmente una reactivación de la inversión privada. Y se propone, a modo de parche, una inversión pública de 50.000 millones de pesetas. ¿A través de quién será canalizada? ¿De dónde van a salir los recursos para ella? O se aumenta el déficit del presupuesto y, como consecuencia, la inflación, o se piden préstamos al exterior, con lo que aumenta el endeudamiento.

Se apoya a la banca privada, a las grandes empresas, pero ¿y a los trabajadores?. En el programa económico no encontramos ninguna medida que suponga una mejora considerable a su situación. Las medidas que se proponen contra el creciente paro son irróricas. Los 50.000 millones de inversión pública son insuficientes para solucionarlo —como mucho 80.000 trabajadores encontrarán empleo a lo largo de este año. ¡Y hay cerca de un millón de parados! ¿Será el proyectado "riego asfáltico de las carreteras" lo que de trabajo al resto de los desempleados? Frente a esto, nada sobre el seguro de desempleo —que no sólo es insuficiente sino que, además, alcanza solamente al 30 por 100 de los parados, según reconocen fuentes oficiales—, nada sobre el apoyo a las pequeñas y medianas empresas para que mantengan puestos de trabajo... Por el contrario, "liberalizar la actual legislación en materia de despido colectivo" —en lenguaje claro, facilitar aún más el despido libre—. ¡Qué mayor "liberalización" que los 300 ex-

pedientes de crisis impuestos en lo que va de año, o los 70 que se anuncian sólo en Madrid para el mes de Marzo y que dejarán en la calle a 10.000 trabajadores!

Del campo, nada de nada. Ni se proyectan aumentos selectivos de precios que procuren un salario digno a los campesinos, ni se les incluye en la Seguridad Social, ni se hace extensivo a ellos el seguro de desempleo.

La alternativa del Gobierno es clara: una moderada reactivación (que ya veremos si se consigue, porque no está nada claro), a costa de aumentar la inflación de forma impresionante, de permitir el crecimiento del volumen de parados y de incrementar el endeudamiento exterior. Los grandes beneficiados: la banca privada y las grandes empresas. Los grandes perjudicados: la pequeña y mediana empresa y, sobre todo, los trabajadores, a los que se anuncia un intento de reducir sus ingresos salariales, dado que el Producto Interior Bruto crecerá un 1 por 100 más que el Consumo privado.

Los trabajadores han demostrado a través de su lucha que no renuncian a mejorar sus condiciones de vida. Son los grandes capitalistas los que provocan el mantenimiento de la crisis, ya que se resisten a invertir si no les están garantizados los superbeneficios de los años franquistas. Ante la crisis sólo cabe plantearse —desde el punto de vista de los trabajadores, de los explotados—, aumentar los ingresos de las clases trabajadoras del campo y la ciudad para que aumente el consumo popular y la producción. ¿Que esto supone hacer frente a la crisis a costa de los privilegios y los beneficios de los grandes capitalistas y que habrá que tomar posturas de fuerza —organización y lucha— para lograrlo? De acuerdo. Pero que no se nos intente convencer de que la única manera de salir de la crisis sigue siendo a costa de los trabajadores. ■



"... seguir favoreciendo a los grandes capitalistas, olvidar a los trabajadores..."

Conquistar las Libertades Municipales

— Por Jaume Peris —
(del Moviment Comunista del País Valencià)

Puesto a hacer negocio con todo, el capitalismo también le ha sacado partido a la ciudad. Los municipios necesitan nuevas viviendas, poner en marcha planes de urbanismo, y tener en funcionamiento servicios escolares, sanitarios, de transporte, mercados, aparcamientos,... La vida moderna ha acrecentado la importancia de estos servicios, multiplicando las necesidades urbanas y creando otras nuevas. Y la burguesía ha visto en todo ello cosas en las que invertir, comenzando por el propio suelo urbano. Diversos tipos de empresas capitalistas (constructoras, de obras públicas, de transporte, de abastecimiento, de semaforización...) explotan a fondo las posibilidades que les abre la vida municipal, siendo el capital urbano uno de los más agresivos.

Sometido a la actuación del capital, el desarrollo de los municipios se produce de modo que, en vez de hacerse teniendo en cuenta los intereses de todos los ciudadanos, satisfaga los intereses de sociedades privadas. La especulación de solares e inmuebles es quizá la más nefasta consecuencia de la entrega del crecimiento de la ciudad a manos del capitalismo. Al mismo tiempo, como busca los mínimos costes, rebaja la calidad, sin que se traduzca tampoco en servicios más baratos para el público (ahí tenemos el ejemplo de la construcción o los transportes). El capital urbano privado, por otra parte, busca invertir en aquellos sectores que le son rentables, dejando para los ayuntamientos aquellos que no lo son. Y, más aún, haciendo que éstos adopten las soluciones que le permitan obtener mayores rendimientos —por ejemplo, escogiendo un modelo de urbanismo que favorezca el transporte privado sobre el público.

El capital ha hecho que los Ayuntamientos se le subordinen. Procura orientar la gestión municipal a favor de sus intereses, programando en su provecho el crecimiento urbanístico y haciendo que se le conceda la explotación privada de los servicios municipales (hay ciudades donde incluso la famosa "grua" pertenece a una empresa particular). No es de extrañar que en nuestras ciudades escaseen las zonas verdes y los centros culturales, o que partes del patrimonio histórico-artístico desaparezcan: eso no es rentable. Los funcionarios "conocidos" de las empresas privadas, los hombres de confianza, los sobres bajo mano y la ideología de quienes han estado al frente de nuestros Ayuntamientos, explican muchas cosas.

Bajo el franquismo todo lo hasta aquí expuesto ha llegado a sus extremos más lamentables. El capitalismo urbano se ha encontrado con unos Ayuntamientos que el pueblo no tenía medios de controlar, con unos Ayuntamientos, sin exageración alguna, radicalmente antidemocráticos.

Las autoridades municipales se han nombrado a dedo; los derechos de los vecinos no han existido; los acuerdos se tomaban y se siguen tomando en "capillitas"; los Ayuntamientos son centralistas frente a los barrios... La gente habla de la "mafia municipal" refiriéndose a ciertos funcionarios omnipotentes, al sistema de "favores" que reina en las alcaldías, y a concejales y alcaldes caciquiles conocidos de pueblos pequeños y grandes ciudades. Es de destacar la insensibilidad y el olvido que han demostrado tantas veces corporaciones enteras sobre las necesidades de la propia nacionalidad o región.

Por su parte, los gobernadores tienen la facultad de destituir alcaldes y concejales o revocar acuerdos de un Ayuntamiento. Si alguien se ha "desmadrado", el centralismo franquista ha cortado por lo sano. Es cosa sabida también que los Ayuntamientos no cuentan con medios económicos suficientes.

En conclusión, en todos estos años los ciudadanos han estado sin defensa, los Ayuntamientos descontrolados, y el capital ha hecho jugosos e intensivos "negocios municipales". Nuestros pueblos y ciudades han crecido y, como era lógico, se han modernizado. Esto último, ha ocurrido en el centro de las ciudades quedando abandonados, en buena medida, los barrios periféricos. Al dejar en manos de la iniciativa privada el desarrollo urbano, se han hecho numerosos desaguisados, muchos de ellos irreparables. La calidad de la vida en nuestras ciudades tampoco es precisamente satisfactoria; hay contaminación, viviendas de pésima calidad, los transportes son insuficientes y caros... y faltan servicios públicos (jardines, zonas deportivas, guarderías, casas de cultura, comedores públicos, casas para ancianos...) Y no se puede olvidar que la presión y las luchas de los movimientos ciudadanos y los vecinos de los barrios, han sido decisivas para arrancar la mayoría de las mejoras que se han conseguido.

DEMOCRATIZAR LA VIDA MUNICIPAL

Bajo el fascismo han nacido y crecido esos movimientos populares ciudadanos. se han creado organizaciones de vecinos, coordinado entidades y realizado ingeniosas y masivas movilizaciones para responder al cúmulo de problemas que tienen nuestros barrios y pueblos. Respuestas que han tenido como uno de sus objetivos la lucha contra la falta de libertades municipales. Precisamente porque los Ayuntamientos franquistas eran el principal tapón frente a los intereses de los vecinos.

Hoy lo más inmediato es lograr democratizar la vida municipal. Pero no a base de dar algunos retoques a las leyes actuales. Las corrientes liberales burguesas se conformarían con dar paso a una elección formal por los vecinos de las autoridades locales, y poner fin a las "trampas" municipales de mayor calibre. Todo esto es completamente necesario, pero muy insuficiente; si se pretende lograr unos Ayuntamientos auténticamente democráticos, la intervención directa del pueblo en la gestión municipal ha de ser determinante.

La confección de nuevas leyes municipales, en nuestra opinión, debe corresponder a los Gobiernos Autónomos de las nacionalidades y regiones. Ello por varias razones: Son quienes pueden hacerlas adaptadas a las peculiaridades específicas de sus municipios (no es lo mismo, por ejemplo, la parroquia gallega que las poblaciones andaluzas); las atribuciones y problemas que han de resolver los ayuntamientos (urbanismo, escolarización, transportes...) se corresponden con las materias que han de ser de la competencia de esos gobiernos; por último, la autonomía es condición de la democracia, debiendo aplicarse a todos los niveles, por lo que sería un contrasentido que el régimen de los municipios siguiese dependiendo del poder central.

ALGUNAS EXIGENCIAS MÍNIMAS

A grandes rasgos, las libertades municipales indispensables y mínimas exigen:

1. La elección popular de todas las autoridades municipales. Estas elecciones deberían hacerse por el sistema proporcional y por listas, pudiendo concurrir todos los partidos políticos y con derecho de voto para todos los mayores de 18 años. Además, en las grandes ciudades, la delimitación de los actuales distritos debe ser revisada, pues en muchos casos no son homogéneos y favorecerían el voto de la derecha. Complemento de esta elección democrática ha de ser el regular la manera por la que los electores puedan revocar a sus elegidos en el caso de que no cumplan con sus responsabilidades.

2. Junto a la existencia de un Plenario —máximo órgano de Gobierno de la ciudad— formado por los concejales y el alcalde, se han de constituir, también mediante elección, las Juntas

de Distrito o Barrio, medio indispensable para descentralizar la vida política de los municipios. Estas Juntas deben tener capacidad de decisión en aquellas cuestiones que afectan a su barriada, y en ellas deben estar presentes las organizaciones cívicas y los representantes directos de los vecinos. En los municipios pequeños, se habría de funcionar por consejo abierto a asamblea de todos los electores.

Al mismo tiempo, los derechos de información, iniciativa y referendum municipal han de estar perfectamente regulados. Ha de haber una información transparente de las actividades, acuerdos y cuentas del Ayuntamiento. Ha de reconocerse la facultad de iniciativa de los vecinos, es decir, de proponer medidas de gobierno a la Corporación Municipal. Por último, los vecinos han de poder promover un referendum para vetar o sancionar medidas tomadas por los Ayunta-

mientos; y éstos deben estar obligados a consultar al pueblo en temas de especial relevancia.

Por otro lado, el Ayuntamiento debe facilitar las reuniones y potenciar las críticas de los vecinos y de las organizaciones ciudadanas (Asociaciones, instituciones culturales, clubs...). Representantes directos de los vecinos han de poder intervenir en las reuniones de la Corporación, participar en las Comisiones de trabajo y planificación formadas para definir la política de tal o cual servicio, redactar planes urbanos, fijar prioridades de actuación y controlar los presupuestos.

3. Los Ayuntamientos han de contar con medios de actuación y medios financieros suficientes para poder llevar adelante una política municipal al servicio de los intereses ciudadanos. Es necesario reconocerles la facultad de municipalizar el suelo, los servicios urbanos y bienes de interés colectivo, fijándose mecanismos sencillos para ello. Se les ha de aumentar las facultades de recaudación de tributos y de adecuación del sistema general de impuestos, con el fin de que se pueda aplicar el criterio de

que "paguen más quienes más beneficio económico sacan de la ciudad". Se ha de determinar las incompatibilidades de cargos en empresas privadas con cargos municipales, con el fin de que los intereses populares sean salvaguardados.

4. Los Ayuntamientos han de gozar de autonomía. Los conflictos con las autoridades gubernativas deben ser resueltos por tribunales autónomos. Los municipios han de poder dotarse de su propio régimen organizativo y económico, adecuado a sus particularidades, mediante la elaboración de una Carta Municipal. Han de tener autonomía para asociarse entre ellos y, en general, aumentar sus facultades decisorias (entre ellas la de elaborar planes urbanísticos, aunque respetando las previsiones de rango más general).

Conseguir estas libertades municipales en un marco democrático, sólo puede favorecer al pueblo, ayudándole a sentar las bases de un potente movimiento ciudadano anticapitalista y una administración popular de la ciudad. El ascenso de las luchas de los barrios, el crecimiento de la fuerza y el número de las asociaciones ciudadanas, promete hacerlo posible.



«LAS AUTORIDADES MUNICIPALES NOMBRADAS "A DEDO" Y LAS EXIGENCIAS DE LOS VECINOS

Algo más que mejores precios

Los campesinos llevan tiempo esperando a que el esfuerzo de su trabajo en el campo sea justamente remunerado, a que sus condiciones de vida mejoren y sus ingresos dejen de hundirse continuamente. Su futuro es negro. De la Administración franquista no han recibido más que palos y palabras huecas;

los intermediarios mayoristas y los monopolios les han explotado; los caciques de la COSA y la Hermandad les han utilizado de mala manera y ahora, cuando todos juntos se han plantado en las carreteras, cae sobre ellos la represión de las brigadas antidisturbios y de la Guardia Civil.

«A nosa terra e nosa e non de FENOSA»

Quizás lo más importante de todo lo ocurrido últimamente en As Encrobas radique en el valor de símbolo que esos hechos tienen. Símbolo de la dependencia y subdesarrollo gallegos; símbolo de las continuas agresiones desatadas en los últimos tiempos contra las clases populares gallegas por las empresas capitalistas; símbolo, en fin, de la resistencia de todo un pueblo a una explotación ya secular.

La historia de As Encrobas comienza con el descubrimiento de un yacimiento de lignito de 87 millones de metros cúbicos en este valle coruñés. Lignitos de Meirama, empresa filial de FENOSA consigue la licencia de explotación del lignito, que FENOSA habría de utilizar como combustible de bajo precio para abastecer una nueva central térmica.

Este proyecto declarado "de interés público" por la Administración central, implica necesariamente la destrucción de los recursos agrícolas que existen en el valle, uno de los más fértiles de la zona norte de Galicia. El procedimiento empleado es, como en casos semejantes, el de la expropiación forzosa, ofreciendo la empresa en cuestión unos precios compensatorios por las tierras que son rechazados por los campesinos. Estos, pese a que toda su vida y todas sus fuentes de ingresos están en esas tierras, plantean como alternativa más justa el traslado de la población a otras tierras de calidad semejante y en similares condiciones a las que se veían obligados a abandonar.

Lignitos de Meirama no dudó en tratar de apoderarse de las tierras por la fuerza, con la ayuda de la Guardia Civil. En el cuarto intento, el día 15 de Febrero, tras 8 horas de enfrentamiento

to —20 heridos y 40 detenidos— ocurrieron las tierras.

Esta historia forma parte de una política de industrialización "salvaje" que trata de aprovechar los abundantes recursos naturales y la barata mano de obra aquí existentes en proyectos industriales de bajo coste. Explotan nuestras fuentes de riqueza y apenas crean puestos de trabajo. El subdesarrollo de Galicia, el paro y la dolorosa necesidad de emigrar se mantienen.

El caso de As Encrobas es enormemente revelador de esto que decimos; se destruye una zona agrícola muy productiva poblada por campesinos de avanzada edad —pues los jóvenes hacen ya tiempo que han emigrado. A cambio, las empresas expropiadoras obtienen una fuente de energía que no va a ser empleada en el desarrollo económico de Galicia, que proporcionará un número insignificante de puestos de trabajo, imposibles, además, de ocupar por esos campesinos hoy expropiados que no reúnen los requisitos de edad y formación técnica que los empresarios buscan.

Sin embargo, pasaron ya a la historia los tiempos en que FENOSA o cualquier otra empresa podía actuar con plena libertad. Hoy son muchos los sectores del pueblo gallego sensibilizados por el grave problema de la falta de industrialización y, lo que es más importante, decididos a impedir que Galicia siga siendo una despensa abierta a la rapiña de los monopolios, mientras continúa sometida a una escandalosa dependencia económica.

Al grito de "A NOSA TERRA E NOSA E NON DE FENOSA", miles de gallegos dejaron oír su voz de protesta durante estos días, logrando detener los planes de Lignitos de Meirama. ■

La indignación de los trabajadores del campo ha saltado ahora por un motivo bien concreto: la decisión del Gobierno de congelar la exportación de la patata, lo que supone la ruina de millares de familias campesinas, mientras que unos pocos desaprensivos mayoristas iban a hacerse de oro este año, comprando a bajo precio lo que los agricultores no podían vender fuera.

Pero los trabajadores del campo han saltado exigiendo algo más que mejores precios para sus productos. Esos 40.000 tractores en las carreteras, a pesar de ser el tiempo apropiado para la siembra, a pesar del frío y la lluvia, a pesar de la represión, quieren sentar las bases para una transformación radical de su situación. En sus asambleas —millares de agricultores al pie del tractor— han ido concretando sus reivindicaciones más urgentes: **libertad de asociación para los trabajadores del campo; acceso al régimen general de la Seguridad Social y desaparición de la cuota patronal para los agricultores modestos; que el FORPA revise los precios de los productos de esta campaña; participación de los campesinos en la elaboración de estos precios; que se negocie la lista de precios en bloque y no uno a uno.**

Con conciencia clara de la necesidad de su unidad, la han puesto en práctica. En su movilización han utilizado de forma espontánea las Asambleas. Si había algún embrión de organización independiente campesina, la han utilizado para coordinarse con otras zonas e impulsar las reivindicaciones más sentidas. Donde no la había, elegían representantes en sus asambleas para que cumplieran la función de coordinar y han comenzado a construir desde la base y por zonas la organización que avance hacia un Sindicato Unitario e Independiente de los Trabajadores del Campo.

La fuerte protesta de los campesinos ha puesto al Gobierno entre la espada y la pared y éste no ha sido capaz de responder más que con un mal parche para solucionar el problema de los excedentes de patata. Por lo demás, pedirles que vuelvan a casa "por el éxito de su movimiento" —como dijo el Ministro de Agricultura—, cuando se han negado en redondo a recibir a los auténticos representantes de los agricultores o hablar de la "frustración del campesino", cuando los intereses de la oligarquía, a la que el Gobierno representa, son los causantes, no es una respuesta: es una muestra de su inmenso cinismo.

La libertad de reunión, la libertad sindical y el derecho a elegir y ser representados por quienes ellos consideren sus verdaderos portavoces, es algo que sólo puede negarlo a los campesinos un Gobierno que no tiene de democrático más que la fachada. □

Torturar será siempre un crimen

La tortura se sigue practicando en las comisarías y los cuartelillos. Últimamente con mayor facilidad e impunidad aún que en los últimos meses. El estado de excepción, decretado a finales de Enero y prolongado por otro mes más, permite a la policía retener a sus presas hasta diez días; la declaración de materia reservada que se mantiene en todo lo referente a informaciones sobre las torturas y sobre las investigaciones en torno a los últimos sucesos, impide que se hable de ello. Así han permanecido ocultas muchas de las detenciones arbitrarias, de los salvajes métodos empleados con los detenidos en estas últimas semanas.

El pasado día 12, en Barcelona, un policía armado de paisano y pistola en mano agarró por el brazo a Carles Urritz mientras colocaba unos carteles junto con Virtudes Rodríguez, Dolors Martínez y Carme Gironés. Arrastró al muchacho y cuando éste le exigió que se identificase se le "escapó" un tiro al policía que le entró por la espalda. Un coche del 091 trasladó a Carles a la Clínica Pere Camps, ya que el policía impidió que se lo llevaran al hospital más próximo. Sus compañeras lo acompañaron voluntariamente y fueron detenidas. Una vez en comisaría empezaron ya los interrogatorios continuados para ellas, haciéndolas permanecer en posición de "firmes" horas seguidas; recibieron todo tipo de golpes, amenazas y vejaciones. Carles Urritz, operado el día 12, el día 14 era ya trasladado a la Jefatura para ser interrogado, a pesar de la gravedad de su estado y el drenaje que llevaba puesto en la herida.

En la misma habitación del hospital donde estuvo internado Carles Urritz había dos jóvenes acusados de pertenecer al GRAPO. El aspecto de ambos era deplorable: todo el cuerpo lleno de hematomas hasta los ojos, manifestaciones evidentes de haber sufrido una terrible paliza. Uno de ellos, Sebastián Lora Sánchez, presentaba el cuerpo hecho un puro hematoma, padecía retención de orina y excrementos y tenía la pelvis rota por los golpes recibidos.

En relación a los casi cincuenta detenidos a finales del mes de Enero acusados de pertenecer a la C.N.T., las últimas noticias, que datan del 23 de Febrero, son que trece de ellos están en la Jefatura de policía de Barcelona y otros seis en la cárcel Modelo. La serie de malos tratos a que fueron sometidos la mayoría de ellos es interminable. Miguel Diego Piñero Costa fue ingresado en el Servicio de Urgencia del Hospital clínico con erosiones en manos, pies y brazos, espalda y glúteos. Ha presentado denuncia contra sus torturadores.

Denunciamos igualmente el traslado arbitrario, desde Murcia a Barcelona, de los trece detenidos acusados también pertenecer a la C.N.T., de los que no se tiene aún noticias.

Poco tiene en común este comportamiento habitual de la policía, de la Bri-

gada Político Social especialmente, con los compromisos y programas, como la Declaración de los Derechos del Hombre, que el Gobierno se ha comprometido a respetar ante la galería internacional.

Rechazamos de plano cualquier tipo de tortura o presión tanto física como psicológica como las que se han ejercido y se siguen llevando a cabo normalmente por la policía política y demás órganos represivos, así como la ausencia de cualquier garantía y seguridad personal que el ciudadano padece en este país en cuanto traspasa el

umbral de una comisaría o cuartelillo.

Ya hemos soportado bastante Inquisición y Torquemadas a lo largo de la historia. Ya es hora de que desaparezcan todas esas instituciones policíacas que tantos sufrimientos han provocado.

Los policías que utilizan la tortura como método de investigación y como medio para obtener declaraciones de culpabilidad de los detenidos deben ser considerados como lo que son: criminales que constituyen un peligro gravísimo para sociedad a la que dicen defender. □



El aborto, una situación límite

Un lamentable suceso, esta vez en un pueblo de Guipúzcoa, ha puesto de nuevo sobre el tapete uno de los aspectos más odiosos en los que se concreta la opresión de las mujeres. Una joven soltera, A.P.V., embarazada de cuatro meses, ha muerto a consecuencia del aborto que trató de provocarse, introduciéndose perejil en la vagina.

Lo verdaderamente dramático de este caso es que dista mucho de ser un hecho aislado o un producto sin más de la ignorancia o de la mala suerte. Lo peor es que esto sucede todos los días. Que son muertes —cuando se producen— previstas y aceptadas por quienes hacen y aplican unas leyes que obligan a que más de 300.000 mujeres todos los años arriesguen su vida, abortando clandestinamente, en condiciones deplorables la mayoría, difíciles de imaginar por quien no lo haya vivido. Difíciles de comprender por quien no se haya encontrado ante la situación de no tener más salida que interrumpir, del modo que sea, un embarazo no deseado, un nuevo hijo imposible de mantener.

Y, si un número tan elevado de mujeres corren estos riesgos no es, evidentemente, por gusto, ni mucho menos por inconsciencia. Es porque se nos niegan los medios para evitar estas situaciones. No hay una información seria y veraz sobre nuestra sexualidad; se nos niega la información y el acceso a los medios anticonceptivos... Así, el derecho a disponer del propio cuerpo no pasa de ser una bonita frase que la mayoría de las mujeres ven coronada con un embarazo. Para colmo, la moral so-

cial ambiente se preocupa de condenar a la madre soltera.

El aborto es siempre, y en cualesquiera condiciones que se realice, una agresión al cuerpo de la mujer. Un mal que ninguna mujer desea, pero al que muchas se ven obligadas a recurrir. Poniendo en peligro su salud, arriesgando a menudo la vida y siempre con la posibilidad de dar con sus huesos en la cárcel. Recordar que el 30 por 100 de la población penal femenina está encarcelada por aborto, resulta suficientemente significativo.

Ante esta situación, ante casos como el de la joven guipuzcoana A.P.V., como el de tantas mujeres que no disponen de medios para trasladarse a Londres o a Suiza para abortar en una clínica privada, ni tienen tampoco posibilidades de mantener material o moralmente a un hijo, se impone que exijamos una radical reforma de la legislación sexista vigente. Son muchas las mujeres que vienen reclamándolo: el derecho a disponer del propio cuerpo pasa por la información sexual y la venta libre y gratuita de anticonceptivos a cargo de la Seguridad Social; es necesario un control médico periódico sobre las mujeres; es de justicia reclamar la investigación y puesta en práctica de medios contraceptivos tomados por los hombres. Y, entre tanto, lograr la despenalización del aborto y el cese de la discriminación contra las madres solteras debe convertirse en una reivindicación unánime, si queremos dar un primer paso en la eliminación de situaciones tan intolerables como la que motiva esta noticia. □

Una muerte silenciada

Esta vez fue Pencho Egea, de diecinueve años, trabajador de la construcción. Durante una manifestación conjunta de los trabajadores de la construcción y del metal de Valencia, el día 14 de Enero, Pencho Egea recibió dos impactos de bala de goma en la cabeza y el cuello.

Ingresó en el Clínico de Valencia donde fue tratado como si tuviera torticolis y poco después enviado a casa. Al empeorar los días 24 y 25 de febrero, estuvo de nuevo sometido a observación. El día 26 murió de un derrame cerebral, como consecuencia de los balazos.

Enterrado el domingo por la mañana en Cartagena, por la tarde se realizó una manifestación para hacer público el hecho y denunciar su muerte. Los manifestantes desfilaron por las calles en total silencio y con brazaletes negros. A pesar de ello, la policía cargó, apaleando a la gente sin miramientos y deteniendo a varias personas.

Su muerte apenas trascendió fuera de Cartagena. Desde aquí queremos extender la noticia. La vida de un trabajador, truncada por dos balazos, exige ser recordada.

Interesantes declaraciones

El actual Jefe Superior de Policía de Oviedo, Carlos Arechina, el comisario del Cuerpo General de Policía, Manuel Sandoval y el jefe de servicio de transmisiones, señor Morilla estaban "interesados precisamente en el trasmisor detonador a distancia que se estaba estudiando en el taller de armas de la calle Pelayo". Lo dice Roberto Reyes, abogado de Sanchez-Covisa, como prueba de su inocencia.

Ojalá el señor Roberto Reyes siga hablando tan claro. Seguramente la lista de

"interesados" en las "investigaciones logísticas" de la ultraderecha nos daría muchas sorpresas. Puede que nos enteremos de que montaban armas para jugar a soldados. Sin embargo, el único objetivo conocido de este tipo de artefactos es su utilización en actividades terroristas de altos vuelos. De lo que puede deducirse que la policía y la ultraderecha no sólo colaboran a la hora de apalear a manifestantes o asesinar a demócratas. Sus planes conjuntos van, por lo visto, más lejos: la práctica del terrorismo en gran escala.

Finalizó la huelga de los P.N.N. de Institutos

Más de seis semanas de lucha han proporcionado a los Profesores No Numerarios un importante caudal de experiencias positivas. Para empezar, han logrado que el Ministerio retire las sanciones económicas impuestas y vuelven a clase sin ningún despedido. Además, han conseguido la seguridad de permanencia en el empleo por un año más, dentro de la misma provincia —o, en el peor de los casos, en el mismo distrito— siendo negociados los posibles traslados por comisiones mixtas con participación de los profesores, y el comienzo de negociaciones con el Ministerio de cara a discutir las fórmulas de acceso a una situación estable de los P.N.N.

Pero, como señalan ellos mismos, el principal logro de su lucha ha sido el funcionamiento unitario y democrático que han mantenido en todo momento, desde las reuniones de centro y las asambleas provinciales a la coordinadora estatal de representantes, en

permanente contacto y consulta con la base —lo que tanto molesta al Ministerio.

Pese a los intentos de las autoridades de Educación y Ciencia para desprestigiar y hacer impopular su lucha, han logrado los P.N.N. el apoyo y la comprensión de la mayoría de los padres y alumnos, la solidaridad de un buen número de asociaciones de vecinos, expresada en reuniones conjuntas, en cartas de apoyo y hasta en colectas, realizadas por los propios alumnos para ayudar a sus profesores.

El problema que motivó su huelga no ha sido solucionado más que en parte; se ha conseguido un aplazamiento por un año de la pérdida del puesto de trabajo que para muchos podía ser inminente. Sin embargo, en adelante, el Ministerio no podrá lavarse las manos frente al problema de la inestabilidad en el empleo, que ha saltado con tanta fuerza ante la opinión pública. ■

Lo dice el Sr. Areilza

Desde que ha empezado el desfile de personalidades renegadas del Régimen y que se pasan a una dudosa oposición, les ha dado por descubrirnos las inmundicias del estado de cosas heredado.

Ahí tenemos a don José M^a de Areilza, Conde de Motrico, diciendo que "en todos los niveles de la Administración Pública existe la corrupción, el soborno, la arbitrariedad, el nepotismo y un mundo gigantesco de inmoralidad". Si no nos lo dice, ni nos damos cuenta.

El caso es que debe ser verdad, ya que quién lo afirma hace sólo unos meses que dejó de ser Ministro de la Monarquía y —por lo que nos consta— no paró de ocupar cargos oficiales desde 1939. Puede, en su disculpa, que quizás se encontrara incómodo entre tanta "inmoralidad". La cosa es que entonces no se quejaba... □

Durante la semana del 27 de Febrero al 6 de Marzo el pueblo de Euskadi ha exigido la vuelta a casa de todos los presos políticos. Con una enorme tenacidad, para recordar al Gobierno que la amnistía sigue pendiente, han protagonizado encierros, manifestaciones y acciones de todo tipo, sin echarse para atrás ante las amenazas y el brutal comportamiento de la Guardia Civil como ha

ocurrido en Lekeitio y Eloorrio.

Pero el Gobierno Suárez debe entender las cosas al revés y lo suyo son las soluciones a medias tintas.

Al proyecto de "extrañamiento" fuera del Estado de alrededor de quince presos políticos vascos le llaman amnistía. Según el Gobierno existen "indicios evidentes" (pero no pruebas ni

juicios) de que ellos han participado en "delitos de sangre". La misma sospecha se aplicaría para unas decenas de exiliados a los que les sería imposible volver con los suyos.

La firme exigencia del pueblo vasco y de los demócratas de todo el Estado, no se va a satisfacer con unas migajas. La amnistía total no es negociable. O es, o no es. □

La amnistía no es negociable

Vitoria, un año después

3 de Marzo de 1976. Cinco trabajadores de Vitoria fueron víctimas de la intransigencia, el ensañamiento y la bestialidad de la policía.

Este año, los trabajadores y el pueblo de Vitoria, que no han olvidado las muertes de sus hermanos, recuerdan la triste fecha con una jornada de luto y de protesta. Nadie, entre el pueblo luchador, es capaz de olvidar tan terribles asesinatos. ■